

Desarrollo de la Primera Infancia: Políticas públicas, inversión e investigación para el futuro de los países

Early childhood development: public policies, investment and research for the future of countries

Mayra Ojeda del Valle

Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM). La Habana, Cuba.

Conforme con los estándares de política internacional, la Primera Infancia es el período comprendido desde el desarrollo prenatal hasta los ocho años de vida. El Desarrollo de la Primera Infancia (DPI) incluye el área física, socioemocional, cognitiva y lingüística y tiene una profunda influencia sobre el aprendizaje básico, el éxito escolar, la participación económica y la salud.

El desarrollo de los niños está condicionado por el medio social más cercano, por las condiciones de vida y de educación en las cuales viven y se desarrollan, entre otras. Ellos se caracterizan por un rápido crecimiento en términos de maduración del cuerpo y del sistema nervioso, de capacidad de comunicación y aptitudes intelectuales; crean vínculos emocionales fuertes con sus padres u otros cuidadores, de los que necesitan recibir cuidado, atención, orientación y protección; son capaces de captar las dimensiones físicas, sociales y culturales del mundo en que viven. En sus primeros años de vida se crean las bases de la salud física y mental, de seguridad emocional e identidad cultural.

Diversas investigaciones demuestran que el entorno inicial de los niños tiene gran impacto sobre el modo en que su cerebro se desarrolla.¹⁻³ Cuanto más estimulante sea el ambiente primario, más conexiones positivas se forman en el cerebro y mejor es el progreso de este en términos de desarrollo físico, emocional y social, así como su capacidad para expresarse y adquirir conocimientos. La nutrición y la salud de la madre y del menor, el fortalecimiento de los vínculos afectivos, la disponibilidad de infraestructura de saneamiento y el acceso a servicios de salud y educación son también determinantes en el desarrollo infantil.

Los dirigentes políticos pueden desempeñar un papel importante en garantizar el acceso universal a una gama de servicios en el área del desarrollo de la Primera Infancia: asistencia para padres y cuidadores, cuidado infantil de calidad, atención primaria de salud, nutrición, educación y protección social pero la sociedad en su conjunto debe ser consciente de la necesidad de adoptar medidas que garanticen el respeto, promoción y protección de los derechos reconocidos a todos los infantes en la Convención sobre los Derechos del Niño.

El Gobierno de Cuba garantiza los derechos fundamentales de los niños y los jóvenes tal y como se proclama en la Constitución de la República, al asegurarles la posibilidad de desarrollar libre y creadoramente su personalidad, sus aptitudes y capacidades, así como el disfrute de una vida plena y feliz. Dentro de la sociedad creada en 1959, el niño pasó de inmediato a ocupar el lugar prioritario en la atención de la sociedad en conjunto, pues ninguna otra edad en la vida del hombre es más vulnerable a las agresiones del medio, más susceptible a sus secuelas y cicatrices que los primeros años de la existencia; a partir de esto, el esfuerzo se ha dirigido de forma permanente y sistemática a incrementar las fuerzas y avances en el campo de la salud, la educación, la nutrición y todos los demás servicios básicos necesarios para la vida.

Cuba firmó la Convención sobre los Derechos del Niño el 26 de enero de 1990, y la ratificó el 21 de agosto de 1991. El instrumento entró en vigor el 20 de septiembre de ese mismo año. La rúbrica del documento permitió al país valorar lo hecho y cuánto faltaba por hacer.

En ese entonces Cuba ya contaba con una serie de normas jurídicas que brindaban una protección especial a los menores, desde la Ley de la Maternidad de la Trabajadora, de 1974; el Código de Familia, de 1975, y el Código de la Niñez y la Juventud, de 1978, que se adelantó a la Convención en cuanto al tema de la participación del joven.

A partir de 1991 estas normas se atemperaron al principio del interés superior del niño presente en el texto de Naciones Unidas. Por ejemplo, en 2003 el Consejo de Estado aprobó el Decreto-Ley No. 234, que respalda la responsabilidad de ambos padres en el cuidado de los hijos, y en 2007 se dictó la Instrucción 187 del Tribunal Supremo Popular, que establece que en aquellos procesos de naturaleza familiar, el menor debe ser oído por el tribunal que conoce del asunto, en un ambiente propicio.

El Estado es uno de los actores clave en el desarrollo de agendas nacionales en favor de la infancia y en el monitoreo de las políticas y programas en desarrollo, siendo necesaria una institucionalidad efectiva a partir de los esfuerzos coordinados de una serie de actores: gobiernos, sociedad civil, agencias internacionales y las familias. Los gobiernos deben reconocer que las inversiones adecuadas en la Primera Infancia representan la piedra angular del desarrollo humano y son esenciales para el progreso de las sociedades.

Las políticas públicas de desarrollo infantil que han demostrado mayor eficacia son aquellas basadas en un enfoque integral que conllevan a coordinar acciones a diferentes niveles e instalar una perspectiva del trabajo interdisciplinario e intersectorial, ponderan el rol decisivo de las familias en el desarrollo integral de los niños y las niñas; promueven la participación activa de la comunidad; propician mejoras en el acceso de las familias a recursos y servicios básicos de calidad y fortalecen los espacios de cuidado temprano y servicios de atención a través de la capacitación del recurso humano, el equipamiento y las mejoras continuas de las instituciones.

Invertir en estos primeros años de vida es una oportunidad con amplios márgenes de ganancia a futuro y tiene un alto rendimiento económico y social. Las sociedades que cuentan con las políticas y los programas de desarrollo de la Primera Infancia más exitosos invierten aproximadamente 1,5 %-2,0 % del Producto Interno Bruto (PIB) al año en esta área. Cuba, con su sistema de educación, ha prestado especial atención a este aspecto. Se estima que cada dólar que se gasta para ayudar a un niño a alcanzar la edad escolar y su progreso, puede producir hasta diecisiete dólares en beneficio de la sociedad a lo largo de las cuatro décadas siguientes. Así, las intervenciones en la Primera Infancia no solo tienen el costo-beneficio más alto, sino también la tasa más alta de retorno por cada dólar invertido.⁴

Resulta esencial fomentar la capacidad nacional y local de investigación sobre la Primera Infancia, pues las evidencias que se obtengan de dichas investigaciones tienen mucho que aportar a los decisores para el desarrollo de políticas y prácticas, la supervisión y evaluación de iniciativas, así como a los especialistas para desarrollar la educación y capacitación de todas las personas responsables del bienestar de los niños.

En el diseño de las políticas a favor de la Primera Infancia se considera la integralidad como un principio básico, reconocen como factor clave en el desarrollo infantil a la familia, garantizan la calidad y sostenibilidad de sus intervenciones, logran sinergias y la articulación entre distintas modalidades y alternativas de intervención, aseguran la disponibilidad de recursos contando con financiamiento responsable, dan un lugar privilegiado en la agenda social, fortalecen los actores locales y los programas de formación inicial y de capacitación continua, y disponen de una entidad coordinadora con capacidad técnica que evalúa, diseña y rediseña la política.

Aunque se ha podido constatar el avance en las políticas y programas destinados a la Primera Infancia, aún existen desafíos en relación a evaluaciones de impacto de políticas y programas que posibiliten ampliar y mejorar las buenas prácticas; un mayor nivel de articulación de los distintos sectores de las políticas de infancia y en algunos países, la rectoría de políticas de carácter nacional.⁵

Según ha reiterado UNICEF no proteger a los niños de la pobreza es uno de los errores más costosos que puede cometer una sociedad. Son los propios niños quienes asumen el mayor de todos los costos, pero también sus países deben pagar un alto precio por su error: menor nivel de competencias y productividad, menor nivel de logros en materia de salud y educación, mayor probabilidad de desempleo y dependencia de la seguridad social, mayor costo de los sistemas de protección judicial y social y pérdida de cohesión social.⁵

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Política educativa para la primera infancia. Por una educación inicial incluyente y para toda la vida. Altablero [Internet]. 2009 feb - abr; (49). Disponible en: <http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-192210.html>
2. Desarrollo Infantil y Educación Inicia. Altablero [Internet]. 2009 feb - abr; (49). Disponible en: <http://www.mineducacion.gov.co/1621/article192419.html>

3. Gudiño V. Neurodesarrollo: el rol de los educadores. Neurofelicidad. Creciendo como seres humanos y aprendiendo a ser felices. [Internet]. 2009 feb - abr; (49). Disponible en: <http://www.e-neurocapitalhumano.org/shop/detallenot.asp?notid=350>
4. UNICEF. Estadísticas. [Internet]. © Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), agosto de 2012. Disponible en: http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/cuba_statistics.html#126
5. UNESCO. Marco de Acción de la Conferencia mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI): Construir la riqueza de las naciones. WCECCE/4 REV. [Internet]. Moscú, 27-29 de sept. 2010. Disponible en: http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc10_esp.pdf